



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0832/18

Referencia: Expediente núm. TC-04-2017-0008, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores José García Blanco y Constantino García Blanco contra la Resolución núm. 2007-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

Expediente núm. TC-04-2017-0008, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores José García Blanco y Constantino García Blanco contra la Resolución núm. 2007-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

El presente recurso fue incoado contra la Resolución núm. 2007-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Dicho fallo declaró la caducidad del recurso de casación interpuesto por los señores José García Blanco y Constantino García Blanco contra la Sentencia núm. 544/2014, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014). El dispositivo de la referida decisión reza de la manera siguiente:

Primero: Declara la caducidad de oficio del recurso interpuesto por José García Blanco y Constantino García Blanco, contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Comercial de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 30 de junio de 2014; Segundo: Ordena que la presente resolución sea comunicada a las partes y publicada en el Boletín Judicial.

La referida sentencia fue notificada a los abogados de la parte recurrente mediante el Acto núm. 659/2016, de cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Italo Américo Patrone Ramírez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

Los señores José García Blanco y Constantino García Blanco interpusieron el presente recurso de revisión jurisdiccional mediante instancia depositada ante la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), recibido en este colegiado el cinco (5) de enero de dos mil diecisiete (2017). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se describirán más adelante.

El recurso de que se trata fue notificado a la parte recurrida mediante el Acto núm. 397/2016, de veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Pedro Emmanuel de la Cruz Morel, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia basó, esencialmente, su Resolución núm. 2007-2016, de trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016) —mediante la cual declaró caduco el recurso de casación incoado por los señores José García Blanco y Constantino García—, por el siguiente motivo:

Atendido, que del análisis de las piezas que conforman el presente caso, se advierte, que no reposa en el expediente el acto de emplazamiento, mediante el cual José García Blanco y Constantino García Blanco, quienes fueron autorizados por auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del 12 de diciembre de 2014, para notificar a la parte recurrida su recurso de casación, de lo que se infiere que la parte recurrente no ha emplazado dentro del término de 30 días que establece el ya citado artículo de la Ley sobre



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procedimiento de Casación, contados desde la fecha en que fue proveído del auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

En su recurso de revisión, los recurrentes, señores José García Blanco y Constantino García Blanco, fundamentan, esencialmente, sus pretensiones en el siguiente argumento:

El garante, señor CONSTANTINO GARCIA BLANCO, nunca le fue notificado los actos propios del procedimiento de embargo inmobiliario, toda vez, que le fueron notificados en la dirección calle Peña Batlle número 125-A, que es el domicilio social de MARTO, S.R.L., empresa que no pertenece al señor CONTASTINO GARCIA BLANCO y que no forma parte del caso. Por lo tanto, por lo tanto, el señor CONSTANTINO no ha sido representado en ningunas de las audiencias, por lo que no ha tenido oportunidad de defenderse.

Fundándose en el argumento expuesto, los indicados recurrentes en revisión solicitan lo siguiente:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión incoado por el señor CONSTANTINO GARCIA BLANCO, contra la sentencia número 2007-2016, de fecha 13 de mayo de 2016, dictada por la Suprema Corte de Justicia;

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia referida, en virtud de que se ha violentado el derecho al debido proceso de defensa del recurrente, y en consecuencia



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

envía el asunto de que se trata por ante la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones civiles;

TERCERO: Condenar al BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho del DR. JOSE MENELO NUÑEZ CASTILLO, quien afirma haberlos avanzado en su totalidad.

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

El recurrido, Banco de Reservas de la República Dominicana, depositó su escrito de defensa el trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017), en el cual expone los siguientes argumentos:

Sin perjuicio de la evidente inadmisión, que afecta al Recurso de Revisión de Decisión Jurisdiccional que nos ocupa y, sin renuncia a ese medio, a continuación, responderemos en cuanto al fondo, los medios en que pretende basarse dicho Recurso, a título subsidiario para el caso improbable de que el mismo no sea declarado inadmisibile.

Supuesta violación a los artículos 68 y 69 de la constitución de la República Dominicana; los señores, JOSE GARCIA BLANCO y CONSTANTINO GARCIA BLANCO, en estos Medios de su Recurso de Revisión, que podrían tratarse como uno solo, señalan que supuestamente, le fue violado su derecho de defensa, en razón de que nunca le fueron notificados los actos del procedimientos en su domicilio, cosa incierta ya que como exponemos anteriormente todos los actos de procedimiento llevado a cabo desde el momento mismo de la demandan en Cobro de Pesos, le fueron notificado en



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

el domicilio otorgados por los hoy recurrentes sin que en ningún momento notificaran acto de advertencia alguna, y siempre fueron representados por sus abogados apoderados en todas las instancias, por lo que no puede considerarse como un hecho de especial trascendencia o relevancia constitucional que justifique un examen y una decisión sobre el recurso planteado por los señores JOSE GARCIA BLANCO Y CONSTANTINO GARCIA BLANCO, que es la condición esencial establecida por el párrafo del artículo 53 de la Ley 137-11 para admitir la revisión de una decisión jurisdiccional.

Fundándose en los argumentos expuestos, el recurrido, Banco de Reservas de la República Dominicana, solicita lo siguiente:

De manera principal: PRIMERO: DECLARAR inadmisibile la acción en Revisión Constitucional contra la Sentencia civil 200-2016, de fecha 13 de mayo del 2016, emitida por la Suprema Corte de Justicia a favor de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO MULTIPLE, interpuesta por los señores JOSE GARCIA BLANCO Y CONSTANTINO GARCIA BLANCO, por ser su recurso dirigido a cuestiones que no son legalmente sujetas a control directo de constitucionalidad, por los motivos expresados. De manera subsidiaria y sin que implique renuncia a nuestras conclusiones principales, y sólo para el caso de que las mismas puedan ser rechazadas, concluimos solicitando: SEGUNDO: RECHAZAR en todas sus partes la presente acción contra la sentencia civil 200-2016, de fecha 13 de mayo del 2016, emitida por la Suprema Corte de Justicia a favor de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO MULTIPLE, interpuesta por los señores JOSE GARCIA BLANCO Y CONSTANTINO GARCIA BLANCO, por los motivos expuestos en el cuerpo del presente escrito de defensa, pero básicamente, por infundado y carente de base legal.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

6. Pruebas documentales

En el presente caso, entre las pruebas documentales figuran las que se indican a continuación:

1. Resolución núm. 2007-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
2. Acto núm. 397/2016, de veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Pedro Emmanuel de la Cruz Morel, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
3. Acto núm. 659/2016, de cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial Italo Américo Patrone Ramírez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
4. Sentencia núm. 1563, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012).
5. Sentencia núm. 544-2014, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesis del conflicto

El conflicto se contrae a la demanda en cobro de dinero incoada por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra los señores José García Blanco y Constantino García Blanco, que fue fallada en favor de la indicada entidad bancaria por Sentencia núm. 1563, expedida por la Sala Civil y Comercial de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012). Mediante dicho fallo, la indicada jurisdicción condenó a los demandados a pagar la suma de cuatrocientos siete mil seiscientos setenta y cinco pesos dominicanos con 86/100 (\$407,675.86) a favor de la parte demandante, en virtud de un pagaré suscrito por los primeros, en favor de la última, el veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008).

Apoderada del recurso de alzada que interpusieron los señores José García Blanco y Constantino García Blanco contra la Sentencia núm. 1563, la Sala Civil y Comercial de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó las pretensiones de los apelantes mediante Sentencia núm. 544-2014, de treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014). A su vez, esta decisión fue objeto de un recurso de casación que fue declarado caduco por medio de la Resolución núm. 2007-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016). En desacuerdo con este último fallo, los recurrentes interpusieron el recurso de revisión que nos ocupa.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8. Competencia

Este tribunal constitucional es competente para conocer del recurso de revisión de decisión jurisdiccional de que se trata, en virtud de lo dispuesto en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, 9, 53 y 54, numeral 8, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011).

9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

Esta sede constitucional estima que el presente recurso de revisión deviene inadmisibile, en atención a los siguientes razonamientos:

a. Para determinar la admisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional de la especie, este colegiado debe abocarse a examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11. Al respecto, se destaca en las dos disposiciones mencionadas la prescripción, a pena de nulidad, de la regla de que sólo resultan susceptibles de revisión constitucional las sentencias con autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada adquirida con posterioridad a la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), criterio que ha sido objeto de reiteración por este colegiado en múltiples oportunidades.¹

En el presente caso se cumple el indicado requisito relativo a la adquisición de la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, porque la decisión impugnada fue dictada el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016); o sea, con

¹ Entre otras decisiones, véanse: TC/0112/13, TC/0121/13, TC/0051/13, TC/0053/13, TC/0081/13, TC/0192/13, TC/0024/14 y TC/0026/14.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de dos mil diez (2010). Además, en razón de que contra la decisión objetada no resulta posible legalmente interponer ningún recurso judicial ordinario o extraordinario.²

b. Conviene señalar, asimismo, que el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 limita las revisiones constitucionales de decisiones jurisdiccionales a los tres siguientes presupuestos: “1. Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2. Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental [...]”.³

En este sentido, como puede observarse, los recurrentes en revisión constitucional basan su recurso en la tercera causal del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11. En efecto, alegan vulneración al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos fundamentales consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución y, sobre todo, invocan también violación a su derecho fundamental a la defensa.

c. En cuanto a las condiciones exigidas por el precitado artículo 53.3,⁴ este colegiado observa el incumplimiento del supuesto previsto en su literal a), puesto que los recurrentes en revisión —señores José García Blanco y Constantino García Blanco— no tuvieron la oportunidad de invocar la violación a sus derechos fundamentales, de acuerdo con sus alegatos ante el Tribunal Constitucional. Este impedimento tiene su origen en que la conculcación alegada fue presuntamente

² Entre otras decisiones, véanse: TC/0053/13, TC/0083/13, TC/0105/13, TC/0105/13, TC/0021/13 y TC/0130/13.

³ Este precedente ha sido reiterado en múltiples fallos. Al respecto, consúltense: TC/0549/16, TC/0090/17, TC/0163/17, TC/0243/17, entre otras.

⁴ Estas condiciones son las siguientes: «a. *Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma*; b. *Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada*; y c. *Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar*».



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

cometida por la Suprema Corte de Justicia con ocasión del conocimiento del recurso de casación por ellos interpuesto.

En relación con este género de situaciones, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la «doctrina de los requisitos inexigibles por imposibilidad de materialización» en los términos transcritos a continuación: “La lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que el recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito devine en inexigible [...]”.⁵ Se trata, por tanto, de una excepción al artículo 53.3.a, ya que la decisión recurrida no es susceptible de recursos en el ámbito del Poder Judicial por haber sido dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia.

d. Respecto al requisito dispuesto en el artículo 53.3.a), relativo a la invocación formal de la violación tan pronto se tenga conocimiento de la misma, la presunta conculcación a los derechos fundamentales invocados por la recurrente en el presente caso se produce con la emisión por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Sentencia núm. 2007-2016 el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), con ocasión del recurso de casación interpuesto por los señores José García Blanco y Constantino García Blanco. En este tenor, dichos señores tuvieron conocimiento de las alegadas violaciones cuando le fue notificada la Sentencia núm. 2007-2016, motivo por el que, obviamente, no tuvo antes la oportunidad de invocar la violación a sus derechos fundamentales en el marco del proceso judicial de la especie. En este sentido, el Tribunal Constitucional estima que, siguiendo el criterio establecido por la Sentencia TC/0123/18, se encuentra satisfecho el requisito establecido por el indicado literal a) del art. 53.3; también, se evidencia la

⁵ TC/0057/12. En este mismo sentido, *vid.* TC/0155/16 y TC/0201/16.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

satisfacción en el presente recurso de revisión de la norma prescrita por el literal b) de dicho art. 53.3. Esta circunstancia se evidencia en vista del agotamiento por parte de los recurrentes “de todos los recursos disponibles dentro de la vía judicial correspondiente”, sin que la conculcación del derecho fuera subsanada.

Por el contrario, el Tribunal Constitucional observa en la especie la inobservancia del requisito previsto en el literal c) de dicho art. 53.3, relativo a que las conculcaciones invocadas por el recurrente en revisión deben ser imputables “de modo inmediato y directo a la acción u omisión del órgano jurisdiccional [...]”. Este criterio se funda en la imposibilidad de atribución de las presuntas violaciones alegadas por los indicados recurrentes en revisión a la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, la cual había fallado el recurso de casación interpuesto por estos últimos, en aplicación de lo que dispone la ley.

e. Al evaluar el cumplimiento del requisito de admisibilidad prescrito en el artículo 53.3.c, este colegiado ha considerado que la aplicación de la ley por parte de los tribunales judiciales no equivale a una acción u omisión violatoria de derechos fundamentales que les sea imputable. El Tribunal Constitucional introdujo, por primera vez, este criterio en su Sentencia TC/0057/12, de veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012), en los siguientes términos: “La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental”.⁶

Actuando dentro del marco de este precedente jurisprudencial, nótese que, en la especie, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia —órgano

⁶ Este precedente ha sido posteriormente objeto de reiteración en múltiples ocasiones:

Expediente núm. TC-04-2017-0008, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores José García Blanco y Constantino García Blanco contra la Resolución núm. 2007-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

jurisdiccional que dictó el fallo hoy recurrido en revisión— inadmitió el recurso de casación interpuesto por los aludidos recurrentes con base en la aplicación de una disposición legal, a saber: el artículo 7 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación,⁷ así concebido: “Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio”.

En efecto, dicha alta corte, tomando como base la regla prescrita por el indicado artículo 7 de la Ley núm. 3726, dictaminó la caducidad del recurso de casación interpuesto por los hoy recurrentes en revisión, señores José García Blanco y Constantino García Blanco. Y falló en este sentido basándose en que:

[...] del análisis de las piezas que conforman el presente caso, se advierte, que no reposa en el expediente el acto de emplazamiento, mediante el cual José García Blanco y Constantino García Blanco, quienes fueron autorizados por auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del 12 de Diciembre de 2014, para notificar a la parte recurrida su recurso de casación, de lo que se infiere que la parte recurrente no ha emplazado dentro del término de 30 días que establece el ya citado artículo 7 de la ley sobre Procedimiento de Casación, contados desde la fecha en que fue proveído el auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia [...].

f. Con base en la argumentación expuesta, esta sede constitucional estima, en consecuencia, que, al expedir la Resolución núm. 2007-2016, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia se limitó a aplicar la ley al dictaminar la

⁷ De fecha veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), modificada por la Ley n° 491/08 de diecinueve (19) de diciembre de dos mil ocho (2008).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

caducidad del recurso de casación sometido a su arbitrio por los aludidos señores José García Blanco y Constantino García Blanco. En este orden de ideas, las conculcaciones a derechos fundamentales invocadas por estos últimos no resultan imputables a dicha alta corte. Por tanto, reiterando los precedentes de este colegiado antes mencionados, procede declarar inadmisibile el recurso de revisión que nos ocupa por no satisfacer el indicado requisito de admisibilidad previsto en el artículo 53.3.c de la Ley núm. 137-11.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisibile el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores José García Blanco y Constantino García Blanco contra la Resolución núm. 2007-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), con base en la motivación que figura en el cuerpo de la presente sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, numeral 6, de la Ley núm. 137-11.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TERCERO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores José García Blanco y Constantino García Blanco, así como a la parte recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana.

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL

En ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011); y respetando la opinión de los honorables jueces que en su mayoría de votos concurrentes aprobaron la sentencia de que se trata, formulo el presente voto disidente pues mi divergencia se sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones en el entendido de que este Colegiado debió admitir el recurso y examinar los aspectos de fondo formulados por la parte recurrente para determinar si se produjo la vulneración de los derechos fundamentales invocados; razón que me conduce a emitir este voto particular.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

VOTO DISIDENTE:

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

1. Los señores José García Blanco y Constantino García Blanco interpusieron un recurso en revisión constitucional de decisión jurisdiccional dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), en contra de la Resolución núm. 2007-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Esta decisión declaró la caducidad del recurso de casación interpuesto contra la sentencia núm. 544/2014 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014)

2. Los honorables jueces de este Tribunal concurrieron con el voto mayoritario en declarar inadmisibile el recurso de revisión por no concurrir los requisitos dispuestos en el artículo 53.3 literal c) de la Ley núm. 137-11, debido a que no resulta imputable de modo inmediato y directo a la Suprema Corte de Justicia la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de la aplicación de normas legales; sin embargo, como explicaremos en lo adelante, dicha afirmación solo válida en principio.

**II. ALCANCE DEL VOTO: EN LA CUESTIÓN PLANTEADA
PROCEDÍA RESOLVER LOS ASPECTOS DE FONDO DEL RECURSO Y
DETERMINAR SI SE PRODUJO LA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS**

3. En el desarrollo de las consideraciones de esta sentencia, este órgano constitucional consideró lo siguiente:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Al evaluar el cumplimiento del requisito de admisibilidad prescrito en el artículo 53.3.c, este colegiado ha considerado que la aplicación de la ley por parte de los tribunales judiciales no equivale a una acción u omisión violatoria de derechos fundamentales que les sea imputable. El Tribunal Constitucional introdujo por primera vez este criterio en su Sentencia TC/0057/12 de veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012) (sic), en los siguientes términos: «La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental»⁸.

Actuando dentro del marco de este precedente jurisprudencial, nótese que, en la especie, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia —órgano jurisdiccional que dictó el fallo hoy recurrido en revisión— inadmitió el recurso de casación interpuesto por los aludidos recurrentes con base en la aplicación de una disposición legal, a saber: el artículo 7 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación⁹, así concebido: «Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio».

En efecto, dicha alta corte, tomando como base la regla prescrita por el indicado artículo 7 de la Ley núm. 3726, dictaminó la caducidad del recurso de casación interpuesto por los hoy recurrentes en revisión, señores José

⁸ Este precedente ha sido posteriormente objeto de reiteración en múltiples ocasiones:

⁹ De fecha veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), modificada por la Ley n° 491/08 de diecinueve (19) de diciembre de dos mil ocho (2008).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

García Blanco y Constantino García Blanco. Y falló en este sentido basándose en que:

[...] del análisis de las piezas que conforman el presente caso, se advierte, que no reposa en el expediente el acto de emplazamiento, mediante el cual José García Blanco y Constantino García Blanco, quienes fueron autorizados por auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del 12 de Diciembre de 2014, para notificar a la parte recurrida su recurso de casación, de lo que se infiere que la parte recurrente no ha emplazado dentro del término de 30 días que establece el ya citado artículo 7 de la ley sobre Procedimiento de Casación, contados desde la fecha en que fue proveído el auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia [...]».

Con base en la argumentación expuesta, esta sede constitucional estima, en consecuencia, que, al expedir la Resolución núm. 2007-2016, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia se limitó a aplicar la ley al dictaminar la caducidad del recurso de casación sometido a su arbitrio por los aludidos señores José García Blanco y Constantino García Blanco. En este orden de ideas, las conculcaciones a derechos fundamentales invocadas por estos últimos no resultan imputables a dicha alta corte. Por tanto, reiterando los precedentes de este colegiado antes mencionados, procede declarar inadmisibile el recurso de revisión que nos ocupa por no satisfacer el indicado requisito de admisibilidad previsto en el artículo 53.3.c de la Ley núm. 137-11.

4. Como se observa, para dar respuesta a la cuestión planteada por los señores José García Blanco y Constantino García Blanco, este Colegiado utilizó la fórmula de la indicada sentencia TC/0057/12 y declaró inadmisibile el recurso de revisión por no concurrir las exigencias previstas en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, sin



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

analizar si la Suprema Corte de Justicia había vulnerado el derecho de defensa y al debido proceso de los recurrentes al declarar la caducidad del recurso de casación, cuestión que obedece al fondo y que a mi juicio era necesario examinar.

5. De acuerdo al artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, la revisión de las decisiones judiciales se realiza cuando se haya producido la violación de un derecho fundamental, en cuyo caso deben concurrir los requisitos siguientes:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

6. Cabe destacar, que la ley establece los casos en que procede el examen del recurso de revisión; sin embargo, este Colegiado parte de una premisa no contemplada originalmente en los supuestos previstos en dicho artículo 53.3, es decir, que apela a una novedosa causal de inadmisibilidad: “la aplicación de la ley por parte de los tribunales judiciales no equivale a una acción u omisión violatoria de derechos fundamentales que les sea imputable”¹⁰.

7. En argumento a contrario, al expuesto por esta Corporación, para determinar si la Suprema Corte de Justicia había realizado alguna acción u omisión que conculcara los derechos fundamentales de los señores José García Blanco y

¹⁰ El subrayado es nuestro.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Constantino García Blanco, era necesario examinar los argumentos presentados por el recurrente y contrastarlos con la sentencia impugnada, y no decantarse por enunciar que:

esta sede constitucional estima, en consecuencia, que, al expedir la Resolución núm. 2007-2016, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia se limitó a aplicar la ley al dictaminar la caducidad del recurso de casación sometido a su arbitrio por los aludidos señores José García Blanco y Constantino García Blanco. En este orden de ideas, las conculcaciones a derechos fundamentales invocadas por estos últimos no resultan imputables a dicha alta corte. Por tanto, reiterando los precedentes de este colegiado antes mencionados, procede declarar inadmisibile el recurso de revisión que nos ocupa por no satisfacer el indicado requisito de admisibilidad previsto en el artículo 53.3.c de la Ley núm. 137-11.

8. Así pues, la Suprema Corte de Justicia inadmite los recursos sobre la base de normas contenidas en la Ley núm. 3726, sin que ello signifique que en todos los casos sus decisiones están exentas de yerros, pues podría ocurrir que considere erróneamente que el recurrente no era parte del proceso y no proceda a examinar el fondo del recurso, haciendo uso del artículo 4 de la Ley núm. 3726, o que declare la caducidad al estimar que el recurrente no cumplió con el plazo de los treinta (30) días dispuesto en el artículo 7 de esa misma ley, vulnerando en ambos casos el derecho a recurrir o el derecho de defensa de la parte; aspectos que solo se pudieran subsanar si este Colectivo admitiera el recurso de revisión constitucional, analizara los documentos aportados en el expediente y se pronunciara sobre el fondo.

9. Ciertamente, la aplicación de una norma y sus consecuencias jurídicas no pueden conducir a la violación de derechos fundamentales; sin embargo, para quien disiente, esta afirmación no puede ser entendida en forma categórica porque podría



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

desembocar en una *falacia* de la que sería difícil liberarse luego de ser incorporada como doctrina del Tribunal Constitucional.

10. El contexto en el que se emplea el término *falacia* es el de la argumentación jurídica, en la que se alude a un tipo de justificación que, si bien aparenta ser jurídicamente válida, en esencia no lo es. En ese sentido, cuando este Tribunal expone que *la aplicación de la ley por parte de los tribunales judiciales no equivale a una acción u omisión violatoria de derechos fundamentales que les sea imputable* parte de una premisa en principio verdadera, pero que deja de lado que una norma legal instituida por el legislador pudiera ser mal interpretada por el juez o que el supuesto de hecho pudiera ser valorado de manera incorrecta, en cuyos casos podría violarse un derecho fundamental o dejar de tutelarlos.

11. Para ATIENZA,¹¹

hay argumentos que tienen la apariencia de ser buenos, pero que no lo son, y a los que tradicionalmente se ha denominado “falacias”. A veces se clasifican en falacias formales e informales, pero, siguiendo las tres perspectivas que hemos distinguido, podríamos agruparlas en falacias formales (lógicas), materiales y pragmáticas. Una falacia formal tiene lugar cuando parece que se ha utilizado una regla de inferencia válida, pero en realidad no ha sido así; por ejemplo, la falacia de la afirmación del consecuente (que iría contra una regla de la lógica deductiva) o de la generalización precipitada (contra una regla de la inducción). En las falacias materiales, la construcción de las premisas se ha llevado a cabo utilizando un criterio sólo aparentemente

¹¹ ATIENZA, MANUEL. *Curso de Argumentación Jurídica*. Editora Trotta, S.A., 2013, página 116-117. Sigue sosteniendo el citado autor que “el estudio de las falacias resulta especialmente importante por la capacidad de engaño que envuelven, al tener esa apariencia de ser buenos argumentos; Aristóteles, en *Refutaciones sofísticas* (Aristóteles 1982), decía que eran como los metales que parecían preciosos sin serlo. Por otro lado, el que usa una falacia puede hacerlo a sabiendas de que es un mal argumento, con el propósito de engañar (cabría hablar entonces de *sofisma*), o bien de buena fe sin ser consciente del engaño que supone (*paralogismo*)”.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

correcto; ejemplos típicos podrían ser la falacia de la ambigüedad o de la falsa analogía. Y en las falacias pragmáticas, el engaño se produce por haber infringido, en forma más o menos oculta, algunas de las reglas que rigen el comportamiento de quienes argumentan, en el marco de discurso dialéctico o retórico [...].

12. La forma de argumentación que utiliza esta decisión logra la conexión entre el órgano productor de la norma y el que la aplica; luego pasa a extraer por vía de deducción que si el aplicador del derecho hace uso de una regla vigente para resolver el caso concreto jamás podría pensarse que semejante actividad puede vulnerar un derecho, en la medida en que estaríamos frente a la trípode sobre la cual descansa una decisión judicial: una norma legal, un supuesto de hecho, y finalmente, una labor de adecuación realizada por órgano habilitado para ello.

13. En la sentencia se da por cierta la afirmación *[...la aplicación de la ley por parte de los tribunales judiciales no equivale a una acción u omisión violatoria de derechos fundamentales (...)]* aun cuando esta cuestión no depende de quien argumenta, sino, más bien, de quien recurre, pues este último es el que imputa o no la violación, mientras que al Tribunal Constitucional le corresponde determinarla; y así, sucesivamente, se va construyendo el argumento falaz con apariencia de ser verdadero.

14. A mi juicio, los conceptos desarrollados en relación a la consecuencia de la aplicación de una norma jurídica, cualquiera que fuese su contenido, debe partir de la tesis de que, si bien corresponde a los órganos jurisdiccionales su aplicación para resolver un caso concreto, esta potestad, como hemos dicho, es solo en principio, puesto que este colegiado conserva siempre la facultad de revisar la interpretación que en su labor de concreción del derecho éstos realizan. Así ha sido expuesto en



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

algunas decisiones de este Tribunal en las que se ha sostenido que *adscribirle significado a la interpretación de la norma constituye un ejercicio que entra en la facultad de los jueces, siempre que el mismo no desborde los límites que le imponen la Constitución y la ley [...]*; ¹² y es que en un Estado de derecho, la actividad de impartir justicia tiene límites implícitos y explícitos en los valores y principios que la Constitución protege.

15. En cualquier circunstancia, como hemos dicho, pueden producirse yerros por parte de quienes deben valorar los elementos fácticos y jurídicos de los procesos que se deciden ante el órgano jurisdiccional, lo que podría implicar alguna violación de derechos fundamentales; y la única garantía de que esos derechos puedan ser salvaguardados es la existencia de un órgano extra-poder con facultad para producir la revisión de esos fallos y adoptar la decisión que la Constitución y la Ley Orgánica prevén en cada situación concreta, siendo ésta la razón de ser de este Tribunal y del recurso de revisión de decisión jurisdiccional.

16. Un ejemplo de ello es la sentencia TC/0427/15 del treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en la que este Tribunal resolvió el fondo de la revisión interpuesta contra una decisión que había pronunciado la caducidad del recurso en virtud del artículo 7 de la Ley 3726, y que luego de evaluar el fondo comprobó que la parte recurrente sí había notificado el recurso a la parte intimada en casación, de modo que estableciéndose la existencia del referido acto y habiéndose verificado como una realidad procesal incontrovertible a la que dio cumplimiento la parte recurrente, se acreditaba la vulneración del debido proceso y la tutela judicial efectiva al producirse el aniquilamiento del recurso interpuesto a consecuencia de la caducidad pronunciada por la Suprema Corte de Justicia.

¹² TC/0006/14 del 14 de enero de 2014, página 29. En esta sentencia se expone, además, que “*los jueces, en su labor intelectual, parten de la premisa que les aporta la ley para aplicarla a la cuestión fáctica que se presenta, para luego extraer de su análisis la inferencia lógica que formulan mediante conclusiones en la decisión que resuelve el caso concreto*”.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

17. En otros argumentos desarrollados en la citada sentencia TC/0427/15, este colegiado consideró

[...] que si bien en la especie el recurrente ejerció el derecho al recurso a través de la instancia depositada en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 11 de diciembre de 2009, la decisión adoptada por error o por inobservancia del órgano que la ha dictado, condujo a cercenar el recurso y por tanto su derecho a que el fallo fuese revisado de conformidad con las normas que regulan el procedimiento de casación previsto en la citada ley núm. 3726.

Continúa exponiendo esa decisión que

[...] la falta de ponderación de un documento fundamental para decidir la suerte del proceso supone una violación del derecho de defensa de la parte que lo ha aportado, máxime cuando en la especie la inobservancia de su existencia constituyó la razón determinante para producir la caducidad, que al ser decidida administrativamente coloca al recurrente en un supuesto que no se corresponde con la realidad procesal que le era aplicable.

18. En el caso expuesto, si el Tribunal se hubiese decantado por resolver la cuestión declarando inadmisibile el recurso de revisión constitucional, por considerar que la Suprema Corte de Justicia aplicó una norma legal, no hubiese ejercido una de las funciones que le asigna la Constitución: proteger los derechos fundamentales de las personas.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

III. CONCLUSIÓN

19. Esta opinión va dirigida a señalar que este Colegiado debió conocer el fondo del recurso y pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos al debido proceso de ley y el derecho a la defensa invocados por los señores José García Blanco y Constantino García Blanco razones que me conducen a disentir de los demás miembros del Pleno de este Tribunal.

Firmado: Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez
Secretario